

18 November 2013

Original: English/Spanish

Implementation Review Group

Resumed fourth session

Panama, 26-27 November 2013

Agenda item 2

Review of implementation of the United Nations Convention against Corruption

Executive summary: El Salvador

Note by the Secretariat

The present conference room paper is made available to the Implementation Review Group in accordance with paragraph 36 of the terms of reference of the Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against Corruption (Conference of the States Parties resolution 3/1, annex). The summary contained herein corresponds to a country review conducted in the second year of the first review cycle. An unofficial English translation follows the original Spanish version of the summary.



Resumen

El Salvador

1. Introducción - Sinopsis del marco jurídico e institucional establecido por El Salvador en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

El Salvador firmó la Convención el 10 de diciembre de 2003, la ratificó el 28 de junio de 2004 y depositó su instrumento de ratificación el 1 de julio de 2004.

Los tratados internacionales constituyen leyes de la República, por lo tanto, la Convención se puede aplicar directamente.

El Salvador tiene un sistema jurídico de tradición romana-continental. El proceso penal es de carácter acusatorio-mixto y se estructura en las diligencias preliminares, la fase de instrucción formal y la fase plenaria.

Las instituciones más relevantes en la lucha contra la corrupción son la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, adscrita a la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República (unidad especializada en la lucha contra la corrupción), la Unidad de Investigación Financiera (adscrita a la Oficina del Fiscal General), el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (Dirección de Protección de Testigos).

2. Capítulo III: Penalización y aplicación de la ley

2.1. Observaciones sobre la aplicación de los artículos objeto de examen

Soborno y tráfico de influencias (artículos 15, 16, 18 y 21)

El soborno activo de funcionarios públicos queda regulado en el artículo 335 (cohecho activo) y el artículo 310 (prevaricato) del Código Penal; los beneficios para terceros no están comprendidos en esos tipos. La definición de funcionario público (art. 39 del Código Penal) no contiene una referencia específica a las personas que prestan servicio en una entidad legislativa o judicial.

En lo referente al soborno pasivo de funcionarios públicos, el Código Penal contempla los tipos de cohecho propio (art. 330), cohecho impropio (art. 331) y concusión (art. 327); los beneficios para terceros no están comprendidos en esos tipos.

El soborno activo de un funcionario público extranjero o un funcionario de una organización internacional pública está regulado en el artículo 335 A del Código Penal (soborno transnacional); a la fecha no existe ningún proceso por este delito. Los beneficios para terceros no están comprendidos en ese tipo. El ordenamiento jurídico no contempla la figura del soborno pasivo transnacional.

No ha sido tipificado el tráfico activo de influencias. El tráfico pasivo de influencias está regulado en el artículo 336, que no menciona explícitamente el elemento “en forma directa o indirecta”.

El Salvador no ha tipificado el soborno en el sector privado.

Blanqueo de dinero, encubrimiento (artículos 23 y 24)

La Ley contra el lavado de dinero y de activos prevé la conducta del blanqueo del producto del delito en sus artículos 4, 5 y 7, complementada por los artículos 214 y 214 A del Código Penal. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 4 de la Ley contra el lavado de dinero, los colaboradores con la justicia gozan de un privilegio que en la práctica constituye casi una inmunidad, ya que su aplicación es casi automática. El Salvador no ha penalizado la asociación y confabulación para cometer el delito de lavado de dinero. El lavado de dinero se aplica a toda actividad delictiva cometida dentro o fuera del país. El Salvador no ha excluido el llamado auto-lavado.

El encubrimiento se encuentra regulado en la Ley contra el lavado de dinero y activos, en sus artículos 7, (casos especiales del delito de encubrimiento) y 8 (encubrimiento culposo); el elemento de “retención continua” no está comprendido en esos tipos.

Malversación o peculado, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito (artículos 17, 19, 20 y 22)

El Código Penal prevé la malversación o el peculado en sus artículos 217 (apropiación o retención de retenciones o percepciones tributarias), 250 (apropiación o retención indebidas), 325 (peculado), 326 (peculado por culpa) y 332 (malversación).

El abuso de funciones queda penalizado en los artículos 320 (actos arbitrarios), 321 (incumplimiento de deberes), 327 (concusión) y 329 (exacción) del Código Penal.

El Salvador tiene tipificado el enriquecimiento ilícito, tanto en su Código Penal (art. 333) como en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. Sin embargo, la legislación en esta materia no permite obtener resultados satisfactorios debido a que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia no tiene facultad de levantar el secreto bancario, y a que el resultado de la fase prejudicial debe ser comprobado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Los artículos 217 (apropiación o retención indebidas) y 218 (administración fraudulenta) del Código Penal comprenden solamente parte de los elementos de la malversación o el peculado en el sector privado; por ejemplo, el artículo 217 se refiere únicamente a cosas muebles, y el artículo 218 establece como requisito la alteración de precios o condiciones.

Obstrucción de la justicia (artículo 25)

Los artículos 153 a 155 (coacción, amenazas) y 307 (soborno) del Código Penal regulan la prestación de testimonios falsos y la obstaculización de la prestación de testimonios; no se hace referencia a la obstaculización de la aportación de pruebas.

No existe legislación específica que penalice la obstrucción del cumplimiento de la justicia y que proteja a los funcionarios de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley.

Responsabilidad de las personas jurídicas (artículo 26)

El derecho salvadoreño no contiene el principio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El Código Penal regula la responsabilidad civil subsidiaria especial de la persona jurídica en sus artículos 38, 116, y 118 a 121, mientras que el Código de Comercio prevé la responsabilidad administrativa y la posibilidad de disolución de una persona jurídica que tenga un objeto o causa ilícitos, en sus artículos 343, 344, 350 a 353 y 355.

Participación y tentativa (artículo 27)

El Código Penal regula la participación (arts. 32 al 37) y la tentativa (art. 62). La preparación con miras a cometer un delito de corrupción no está penalizada.

Proceso, fallo y sanciones; cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (artículos 30 y 37)

Todos los delitos tipificados con arreglo a la Convención están sancionados con penas de privación de libertad de entre 2 y 15 años.

La Constitución (arts. 236 a 238) y el Código Procesal (arts. 419 y 420) otorgan prerrogativas jurisdiccionales a altos funcionarios, diputados y jueces: existe una percepción de que los requisitos para levantar los privilegios podrían presentar obstáculos.

El principio de oportunidad está previsto en casos limitados que toman en cuenta la afectación del bien jurídico.

Se observa con preocupación el alargamiento de los períodos de detención provisional pese a la existencia de alternativas.

Si bien existe una normativa referente a la libertad condicional y la libertad condicional anticipada, hay capacidad limitada para aplicarla.

Se puede suspender a un funcionario público que sea acusado de corrupción si este ha sido sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental, o si goza de prerrogativas jurisdiccionales.

El Código Penal contiene las sanciones de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial; dichas sanciones no están previstas para todos los delitos de corrupción.

Además del régimen penal, existen los regímenes sancionatorio administrativo (responsabilidad de la Corte de Cuentas), de ética (responsabilidad del Tribunal de Ética Gubernamental) y disciplinario (responsabilidad de las Comisiones de Servicio Civil).

Con respecto a la colaboración con la justicia, el artículo 18, párrafo 1, del Código Procesal Penal establece la posibilidad de prescindir de la persecución penal del colaborador que brinde información relevante; no se menciona explícitamente la colaboración para privar a los delincuentes del producto del delito. El artículo 4 de la Ley contra el lavado de dinero y activos contiene una regulación específica. La mitigación de la pena en casos de colaboración y la prestación de cooperación a las autoridades competentes de otro Estado parte no se encuentran reguladas.

Protección de testigos y denunciantes (artículos 32 y 33)

El Salvador tiene la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos y el Programa de protección a víctimas y testigos, además de normas probatorias que permiten prestar testimonio sin poner en peligro la seguridad de testigo. La participación de las víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales está regulada por el artículo 106 del Código Procesal Penal.

La protección de los denunciantes no prevé la protección laboral con carácter general.

Embargo preventivo, incautación y decomiso; secreto bancario (artículos 31 y 40)

El Código Penal regula el decomiso del producto del delito y del instrumento utilizado en la comisión del delito en los artículos 126 (pérdida) y 127 (comiso); estas normas no se aplican a los instrumentos destinados a utilizarse en la comisión del delito.

El Salvador tiene un proyecto de ley sobre extinción de dominio.

El artículo 283 del Código Penal regula la incautación de todos los objetos o documentos “relacionados con la comisión de un hecho delictivo”, lo cual no parece incluir el producto de delito. Solamente en lo que respecta al lavado de activos están regulados todos los elementos de incautación previstos en la Convención. No existe un reglamento general para la administración de bienes decomisados e incautados aplicable a delitos de corrupción.

No se ha legislado sobre el decomiso del producto del delito que se haya transformado o convertido en otros bienes o mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas; en consecuencia, tampoco sobre los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes en los que se ha transformado o convertido el producto.

El artículo 21 de la Ley contra el lavado de dinero y de activos regula lo previsto en el párrafo 8 del artículo 31 en lo que respecta al delito de lavado de dinero.

El artículo 127 del Código Penal prevé que el comiso sea sin perjuicio de los derechos de adquirentes de buena fe; no se regula lo mismo en los casos de pérdida.

El secreto bancario puede ser levantado por orden judicial o a pedido del Fiscal General (art. 277 del Código Procesal Penal, art. 232 de la Ley de Bancos).

Prescripción; antecedentes penales (artículos 29 y 41)

Los plazos de prescripción parecen breves y las posibilidades de interrupción escasas (art. 242 de la Constitución, arts. 32, 33, 36 y 86 del Código Procesal Penal).

El Salvador no ha legislado con respecto a la reincidencia internacional.

Jurisdicción (artículo 42)

El Salvador ha establecido su jurisdicción respecto de la mayor parte de los supuestos indicados en el artículo 42 de la Convención, aunque no ha establecido claramente su jurisdicción sobre los delitos de corrupción cometidos por uno de sus nacionales; los actos de participación, preparación, tentativa y demás con miras a cometer un delito de lavado de dinero que se cometan completamente en el extranjero; y los delitos que se cometan contra el Estado parte. Además, El Salvador

no ha establecido su jurisdicción cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y El Salvador no lo extradite.

El Salvador no ha presentado ni normativa ni casos prácticos de consultas pertinentes según el artículo 42, párrafo 5, de la Convención.

Consecuencias de los actos de corrupción; indemnización por daños y perjuicios (artículos 34 y 35)

El Salvador no dispone de legislación sobre las consecuencias de los actos de corrupción, pero sí dispone de normas sobre la indemnización por daños y perjuicios (art. 245 de la Constitución, arts. 115 a 121 del Código Penal y arts. 42 y 43 del Código Procesal Penal).

Autoridades especializadas y coordinación entre organismos (artículos 36, 38 y 39)

Existen órganos especializados en materia de represión de la corrupción; cabe señalar que la policía no cuenta con una unidad especializada de investigación patrimonial financiera.

Existen medidas de cooperación entre organismos nacionales; sin embargo, se observan con gran preocupación los obstáculos jurídicos y prácticos que impiden el flujo de información entre las instituciones y la falta de fluidez de comunicación entre las autoridades de investigación y persecución de los delitos y los organismos públicos.

No se observa ninguna cooperación estructurada entre las instituciones de investigación y el sector privado. Existen algunos mecanismos para denunciar la comisión de delitos de corrupción.

2.2. Logros y buenas prácticas

- Con respecto a la prescripción, se señala como buena práctica que el plazo de prescripción por delitos y faltas oficiales se cuenta desde que el funcionario haya cesado en sus funciones.
- Se toma nota de los esfuerzos realizados por El Salvador para permitir la implementación de programas piloto de reinserción social.

2.3. Problemas en la aplicación

Observaciones generales

- Se recomienda la creación de un mecanismo de publicación de estadísticas de casos investigados y adjudicados.
- Se recomienda que se procure integrar el pleno del Tribunal de Ética Gubernamental para que se pueda cumplir el quórum, y que se dote al Tribunal de los recursos necesarios y de personal especializado en investigación.
- Se observa con preocupación el paralelismo del sistema sancionatorio en materia administrativa, disciplinaria y de ética, y se recomienda que se busquen vías para evitar la impunidad o la duplicación de sanciones.

- Se subraya la necesidad de continuar aplicando una política activa de reforma penitenciaria y de asignar, en la medida de lo posible, los recursos presupuestarios necesarios para ello.
- Se recomienda que se modifique la definición de funcionario y empleado público para incluir a las personas que presten servicio en una entidad legislativa o judicial.

Penalización

Con respecto a la penalización, se recomienda a El Salvador

- que modifique los tipos del soborno activo y pasivo y de soborno activo transnacional de modo que abarquen los beneficios para terceros (art. 15 a) y b), art. 16, párr. 1); y que se considere la posibilidad de tipificar el soborno transnacional pasivo (art. 16, párr. 2).
- que considere la posibilidad de crear el tipo de tráfico activo de influencias (art. 18 a).
- que se asegure que el artículo 336 del Código Penal sea aplicado a los casos de solicitud o aceptación indirecta; si en el futuro el órgano judicial no interpretara la ley en ese sentido, podría ser necesario aclarar la ley mediante una reforma legislativa (art. 18 b)).
- con relación al enriquecimiento ilícito, que se permita a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia levantar el secreto bancario cuando se detecten irregularidades en las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos; además, se alienta a la Corte Suprema de Justicia a que dedique más personal especializado para la verificación de las declaraciones patrimoniales, y se sugiere considerar una mejor coordinación entre la Sección de Probidad y la Fiscalía General, en particular que la segunda informe a la primera del seguimiento de los potenciales casos de enriquecimiento ilícito (art. 20).
- que se considere la posibilidad de tipificar el soborno en el sector privado (art. 21).
- que se considere la posibilidad de incluir en el Código Penal un tipo general de malversación o peculado en el sector privado (art. 22).
- con respecto al delito de lavado de activos, que se asegure que la exención de la responsabilidad penal (art. 4, párr. 4, de la Ley contra el lavado de dinero) quede sujeta a la evaluación de cada caso individual y no sea automática; si en el futuro el órgano judicial no interpretara la ley en ese sentido, podría ser necesario aclararlo mediante una reforma legislativa (art. 23, párr. 1).
- que penalice, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la asociación y confabulación para cometer el delito de lavado de dinero (art. 23, párr. 1 b) ii)).
- que considere la posibilidad de enmendar los artículos 7 y 8 de la Ley contra el lavado de dinero y activos para cubrir el elemento de “retención continua” (art. 24).

- que se integre en los artículos 153 a 155 y 307 del Código Penal la obstaculización de la aportación de pruebas (art. 25 a)), y que se creen tipos penales específicos para evitar que se obstruya el cumplimiento de la justicia y para proteger específicamente a los funcionarios de la administración de justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley (art. 25 b)).
- que se considere la posibilidad de incorporar en la legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas; que se adopte una definición menos restrictiva de la responsabilidad civil de las personas jurídicas (art. 119 del Código Penal) y se permita una responsabilidad solidaria entre ésta y la persona natural en todos los delitos tipificados por la Convención, y que se incluya en el Código Comercial la facultad para disolver sociedades lícitas por los delitos de corrupción que cometan sus representantes (art. 26, párrs. 1 y 2).
- El Salvador podría adoptar las medidas necesarias para tipificar la preparación con miras a cometer un delito de corrupción (art. 27, párr. 3).

Aplicación de la ley

Con respecto a la aplicación de la ley, se recomienda a El Salvador:

- que considere la posibilidad de ampliar los plazos de prescripción para delitos de corrupción, o de ampliar las causas de interrupción (art. 29).
- que considere la posibilidad de revisar el proceso de levantamiento de prerrogativas e inmunidades jurisdiccionales (art. 30, párr. 2).
- que dedique los recursos necesarios para una eficaz administración de justicia e incremente los esfuerzos de concientización entre los jueces sobre las alternativas a la detención (art. 30, párr. 4).
- con respecto a la libertad condicional y la libertad condicional anticipada, y en la medida de lo posible, que se incremente el número de jueces de vigilancia en el país y que se cree la capacidad criminológica para realizar las experticias correspondientes (art. 30, párr. 5).
- que considere la posibilidad de establecer procedimientos para suspender a los funcionarios públicos acusados de delitos de corrupción, aunque todavía no hayan sido sancionados (art. 30, párr. 6).
- que se incluya la inhabilitación, incluida la inhabilitación para ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado, como sanción para todos los delitos de corrupción (art. 30, párr. 7).
- que se legisle sobre el decomiso del instrumento destinado a utilizarse en la comisión del delito (art. 31, párr. 1 b)) y que se amplíe el artículo 283 del Código Procesal Penal de modo que quede incluido explícitamente el producto e instrumento del delito (art. 31, párr. 2).
- que se adopte una regulación sobre la administración de los bienes embargados, incautados o decomisados que se aplique a los delitos de corrupción y abarque todos los elementos previstos en el párrafo 3 del artículo 31.

- que se adopten normativas sobre el decomiso del producto del delito cuando se haya transformado o convertido en otros bienes (art. 31, párr. 4), mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas (art. 31, párr. 5), y de los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito (art. 31, párr. 6).
- que considere la posibilidad de exigir a un delincuente en casos de corrupción que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno (art. 31, párr. 8).
- que se establezca un procedimiento para los terceros de buena fe que se aplique al instituto de pérdida (art. 31, párr. 9).
- que siga tratando de concluir acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación internacional de testigos y peritos, teniendo en cuenta que ya se han concluido tales acuerdos y arreglos (art. 32, párr. 3).
- que amplíe la protección laboral otorgada a los denunciantes de delitos de corrupción a todos los funcionarios públicos y empleados del sector privado (art. 33).
- que adopte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas para eliminar las consecuencias de los casos de corrupción en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva (art. 34).
- que enmiende las normas sobre colaboración con la justicia para que se refieran explícitamente a la prestación de ayuda concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese producto (art. 37, párr. 1).
- que considere la posibilidad de prever la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos de corrupción (art. 37, párr. 2).
- que considere la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con respecto a la colaboración con la justicia en otro Estado (art. 37, párr. 5).
- que se establezcan canales de coordinación e intercambio de información, en particular en los casos en que la Fiscalía participa, y se averigüen las posibilidades de facilitar un proceso de coordinación con mayor eficacia (art. 38).
- que adopte las medidas que sean necesarias para alentar la cooperación entre los organismos nacionales de investigación y el ministerio público, por un lado, y las entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisión de los delitos de corrupción (art. 39 paragraph 1), y que considere la posibilidad de ampliar las medidas para alentar a sus nacionales a denunciar la comisión de delitos de corrupción (art. 39 paragraph 2).

- El Salvador podrá adoptar las medidas que sean necesarias para tener en cuenta toda previa declaración de culpabilidad de un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a delitos de corrupción (art. 41).
- El Salvador podrá adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de:
 - todos los delitos de corrupción cuando sean cometidos por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio (art. 42 párr. 2 b));
 - los actos de participación, preparación etc. con miras a cometer un delito de lavado de dinero que se cometan completamente en el extranjero (art. 42 párr. 2 c));
 - los casos cuando el delito se cometa contra la República de El Salvador (art. 42 párr. 2 d));
 - los casos cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y El Salvador no lo extradite (art. 42 párr. 4).

Se alienta a El Salvador a que, si toma conocimiento de que otros Estados parte están realizando una investigación o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, consulte con ellos a fin de coordinar las medidas (art. 42 párr. 5).

2.4. Necesidades de asistencia técnica para mejorar la aplicación de la Convención

El Salvador ha solicitado asistencia técnica para poner en marcha las observaciones mencionadas.

- Asistencia legislativa (arts. 15-25, 29 a 31, 33 a 34 y 37, entre otros),
- Fortalecimiento de capacidades especializadas (arts. 30 y 31, entre otros),
- Asistencia para mejorar la coordinación interinstitucional (arts. 38 y 39),
- Apoyo en temas de reintegración de delincuentes (art. 30, párr. 10).

3. Capítulo IV - Cooperación internacional

3.1. Observaciones sobre la aplicación de los artículos objeto de examen

Extradición; traslado de personas condenadas a cumplir una pena; remisión de actuaciones penales (artículos 44, 45 y 47)

Los requisitos para la extradición están contenidos en el artículo 28 de la Constitución y los tratados que El Salvador ha ratificado. No obstante, con excepción de la extradición pasiva de nacionales, no se requiere un tratado. El principio de reciprocidad se ha aplicado, aunque en casos excepcionales. La Convención no puede ser utilizada como base jurídica.

La extradición tiene como requisito la doble incriminación.

Debido al limitado número de casos de extradición, la jurisprudencia todavía está en evolución.

La extradición de nacionales no se permite con carácter general, a menos que un tratado lo prevea expresamente y estipule la reciprocidad.

En relación con los delitos extraditables, algunos de los tratados bilaterales han adoptado un sistema de lista, sin incluir todos los delitos de corrupción. Sin embargo, El Salvador consideraría los delitos contenidos en la Convención como delitos extraditables y presentó un caso pertinente.

Las solicitudes se tramitan a través de los canales diplomáticos. La capacidad de determinar si la extradición pasiva se permite reside en la Corte Suprema de Justicia.

Cuando la extradición sea denegada por motivos de nacionalidad, la legislación salvadoreña no contiene ninguna obligación de someter el caso a las autoridades nacionales competentes.

No existe normativa interna para la ejecución de una sentencia conforme a la legislación del Estado parte, pero no se prohíbe esa posibilidad.

Con respecto al traslado de personas condenadas a cumplir una pena, El Salvador ha ratificado varios acuerdos bilaterales y multilaterales.

El Salvador no cuenta con legislación o con tratados sobre el traslado de procedimientos penales.

Asistencia judicial recíproca (artículo 46)

La base del procedimiento de prestación y recepción de asistencia judicial recíproca en El Salvador emana del artículo 182 (3) de la Constitución. El Salvador ha concluido numerosos tratados y convenciones bilaterales, regionales e internacionales y puede también prestar asistencia sobre la base de la reciprocidad.

Los párrafos 7 y 9 a 29 se pueden aplicar directamente (art. 144 de la Constitución), y se han aplicado recientemente en un caso. No se han regulado con claridad los límites de la aplicación directa en ausencia de tratados ni de la derogación de tratados existentes en favor de los mencionados párrafos.

La autoridad central en materia de asistencia judicial recíproca es el Ministerio de Relaciones Exteriores. No se requiere la tramitación de la solicitud a través de los canales diplomáticos y, para aquellos casos de mayor urgencia, las solicitudes pueden ser procesadas a través de la INTERPOL. Con respecto a otros tratados de asistencia judicial recíproca, han sido designados otras instituciones como autoridades centrales. De enero a junio de 2012, la autoridad central tramitó 83 solicitudes de asistencia judicial recíproca, tanto pasiva como activa.

El trámite de solicitudes está a cargo de la unidad de asistencia judicial recíproca de la Corte Suprema de Justicia, que presenta la solicitud al pleno de la Corte para su dictamen en decisión unánime con un quórum de 8 de 15 magistrados.

La doble incriminación no se requiere excepto en aquellos casos en los que los tratados lo prevean, por ejemplo, cuando la solicitud se refiera a medidas relativas coercitivas.

El Salvador está trabajando actualmente en acuerdos bilaterales con otros cinco países.

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley; investigaciones conjuntas; técnicas especiales de investigación (artículos 48, 49 y 50)

La policía de El Salvador coopera con las fuerzas policiales de otros países, de manera directa o a través de la INTERPOL, y se usan acuerdos de cooperación entre Fiscalías, la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición de la Organización de los Estados Americanos, la IberRed, la Red de Fiscales REFCO, el Grupo Egmont y la Organización Mundial de Aduanas.

El artículo 78 del Código Procesal Penal regula las investigaciones internacionales; el alcance de esa cooperación se limita a las investigaciones y no incluye juicios.

El Salvador cuenta con un marco jurídico básico de técnicas especiales de investigación para "actos criminales graves"; no se han suscrito acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por el uso de dichas técnicas.

3.2. Logros y buenas prácticas

- El Salvador ha manifestado que está planeando adoptar una ley sobre cooperación internacional (arts. 44 y 46).
- El Salvador es parte en convenios regionales que sirven como base jurídica para la extradición (art. 44, párr. 6).
- Como miembro de la Organización de los Estados Americanos, El Salvador hace uso del Sistema Seguro de Comunicación Electrónica (art. 46).
- La unidad de asistencia judicial recíproca de la Corte Suprema de Justicia logró de solucionar un problema de acumulación de casos pendientes utilizando un sistema que daba prioridad a los casos de mayor antigüedad (art. 46).
- En el tratado de asistencia con Argentina, una disposición específica establece expresamente que el secreto bancario no será considerado causa justificada para denegar la asistencia (art. 46, párr. 8).
- Se invocó el artículo 46 en dos casos recientes (art. 46, párrs. 9 a 29).
- Las autoridades salvadoreñas han utilizado diferentes canales, incluida la comunicación por vía telefónica, como medios de consulta sobre los avances de solicitudes (art. 46, párrs. 9 a 29).

3.3. Problemas en la aplicación

- Se recomienda que se adopte legislación que aclare los procedimientos y bases jurídicas de la extradición; esa legislación podría prever mecanismos para agilizar el procedimiento y simplificar el procedimiento probatorio, y contener la obligación de enjuiciamiento en aquellos casos en los que la extradición sea denegada por motivo de nacionalidad (art. 44).
- Se recomienda a El Salvador que sigue asegurando la aplicación de los principios contenidos en el artículo 44 de la Convención, por ejemplo, que todos los delitos de corrupción serán considerados extraditables (art. 44).

- El Salvador podrá conceder la extradición en ausencia de la doble incriminación (art. 44, párr. 2).
- El Salvador podrá aplicar directamente el principio de la extradición por delitos conexos (art. 44 párr. 3).
- Para nuevos tratados en el futuro, se recomienda que se incluyan todos los delitos de corrupción y se regule que éstos no sean considerados como delitos políticos (art. 44, párr. 4).
- Sería deseable que El Salvador ratifique con otros Estados partes tratados de extradición, en vista de que no considera la Convención como la base jurídica de la extradición (art. 44, párr. 6).
- Se anima al Salvador a considerar la aplicación directa del artículo 44, párrafo 13, de la Convención, para hacer cumplir la condena en el caso de que se deniegue una solicitud de extradición solicitada con el propósito de hacer cumplir una sentencia por razón de la nacionalidad (art. 44, párr. 13).
- Con respecto al traslado de personas condenadas, se mencionaron dificultades al trasladar un preso a otro país en el cual no existan sentencias similares. También sería útil si hubiera algunas directrices nacionales sobre los plazos para las decisiones pertinentes. Se presentaron retos en relación con los costes del traslado, y con el hecho de que el traslado de presos puede tener el efecto de romper la unidad familiar; sería positivo que existieran medidas para paliar estos efectos (art. 45).
- Se recomienda que se considere la posibilidad de establecer un sistema centralizado adecuado de seguimiento y recopilación de estadísticas de asistencia judicial recíproca y un procedimiento operativo estándar escrito para la tramitación de las solicitudes de asistencia (art. 46).
- Se recomienda que se considere la posibilidad de armonizar el marco jurídico y los diferentes tratados con respecto a la doble incriminación y a los delitos fiscales/tributarios para aplicar plenamente los párrafos 2, 9 a) y 22 del artículo 46.
- Se alienta a El Salvador a que transmita información sin previa solicitud si cree que esa información podría ayudar a la autoridad de otro Estado parte, teniendo en cuenta que su ordenamiento jurídico no lo prohíbe; que adopte legislación específica y aplique el párrafo 5 de manera directa en caso que reciba información (art. 46, párrs. 4 y 5).
- Se anima a El Salvador que considere la aplicación directa de los párrafos 9 a 29, tanto en ausencia de un tratado, como mediante el acuerdo de su aplicación en lugar de los tratados ya existentes (art. 46, párrs. 9 a 29).
- El Salvador tal vez desee examinar y estudiar (con la ayuda de las estadísticas cuando éstas estén disponibles) si existe la necesidad de crear una autoridad central común para todos los tratados de asistencia judicial recíproca (art. 46, párr. 13).
- Se recomienda que se adopte legislación o se suscriban acuerdos con otros Estados que permitan la transferencia de un proceso penal a otro Estado parte (y viceversa) (art. 47).

- Se anima a El Salvador a considerar la celebración de acuerdos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre las agencias policiales y sus contrapartes (art. 48, párr. 2).
- Se recomienda a El Salvador que suscriba acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales para el uso de técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación a nivel internacional (art. 50).

3.4. Necesidades de asistencia técnica para mejorar la aplicación de la Convención

El Salvador ha solicitado asistencia técnica para mejorar la cooperación internacional:

- Asistencia en el desarrollo de legislación sobre cooperación internacional (arts. 44 y 46),
- Desarrollo de nuevos tratados y acuerdos (arts. 44, 47, 48 y 50),
- Fortalecimiento de capacidades especializadas (arts. 44, 46 y 50).

[Unofficial translation]

Executive summary

El Salvador

1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of El Salvador in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption

El Salvador signed the Convention on 10 December, 2003, ratified it on 28 June, 2004 and deposited its instrument of ratification on the 1 of July, 2004.

International treaties constitute laws of the Republic, therefore, the Convention can be applied directly.

El Salvador has a civil law system. The criminal procedure follows a mixed-accusatory system and is structured in the preliminary phase, the formal investigation phase and the judicial phase.

The most relevant institutions in the fight against corruption are the Assistant Secretary for Transparency and Anticorruption, attached to the Presidency of the Republic, the Attorney General's Office (specialized unit in combatting corruption), the Financial Investigations Unit (attached to the Attorney General's Office), the Government Ethics Tribunal, the Court of Accounts, the Superintendency of the Financial System, Coordinating Commissions in the Justice Sector and the Technical Executive Unit of the Judiciary (Office for the Protection of Witnesses).

2. Chapter III: Criminalization and law enforcement

2.1 Observations on the implementation of the articles

Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)

The active bribery of public officials is regulated in article 335 (active bribery) and article 310 (malfeasance) of the Criminal Code; benefits for third parties are not covered by these offences. In the definition of public official (article 39 of the Criminal Code), persons who serve a legislative or judicial entity are not specifically covered.

With regard to passive bribery of public officials, the Criminal Code provides for the types of proper bribery (article 330), improper bribery (article 331) and extortion (article 327); benefits for third parties are not covered by these offences.

Active bribery of a foreign public official or an official of a public international organization is regulated in article 335 A of the Criminal Code (transnational bribery); to date there are no legal cases involving this offence. The benefits for third parties are not covered by these offences. The law does not foresee passive transnational bribery.

The active trading in influence has not been criminalized. The passive trading in influence is regulated by article 336, which does not explicitly cover the element of "directly or indirectly".

El Salvador has not criminalized bribery in the private sector.

Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)

The Law against money and asset laundering envisages the conduct of laundering the proceeds of crime in its articles 4, 5 and 7, complemented by articles 214 and 214 A of the Criminal Code. In accordance with paragraph 4 of article 4 of the law against money laundering, persons cooperating with justice are accorded a privilege which in practice constitutes almost an immunity, since its application is almost automatic. El Salvador has not criminalized the association with or

conspiracy to commit the offence of money laundering. Money laundering applies to all illicit activities committed inside or outside of the country. El Salvador has not excluded “self-laundering”.

Concealment is regulated in the Law against money and asset laundering, in its articles 7 (special cases of the offence of concealment) and 8 (negligent concealment); the element of “continued retention” is not covered by these offences.

Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)

The Criminal Code foresees misappropriation or embezzlement in its articles 217 (Appropriation or Retention of Tax Withholdings or Earnings), 250 (Undue Appropriation or Retention), 325 (embezzlement), 326 (Intentional embezzlement), and 332 (Misappropriation).

The abuse of functions is criminalized in articles 320 (Arbitrary Acts), 321 (Non-compliance with Duties), 327 (Extortion) and 329 (Illegal levying) of the Criminal Code.

El Salvador criminalizes illicit enrichment both in its Criminal Code (article 333) and in its Law on Illicit Enrichment of Public Officials and Civil Servants. Nonetheless, the legislation in this regard does not allow obtaining satisfactory results due to the fact that the Probity Section of the Supreme Court of Justice does not have the power of lifting bank secrecy, and because the result of the pretrial phase must be endorsed by the Supreme Court of Justice meeting in plenary.

Articles 217 (misappropriation or wrongful detention) and 218 (Fraudulent administration) of the Criminal Code cover only part of the elements of embezzlement of property in the private sector; for example, article 217 only refers to movable property and article 218 has as a requirement that prices or conditions be altered.

Obstruction of justice (art. 25)

Articles 153 to 155 (Coercion, Threats, Special aggravating circumstances) and 307 (Bribery) of the Criminal Code regulate false testimony and the interfering in the giving of testimony; there is no reference to the interfering with the production of evidence.

There is no specific legislation that criminalizes the obstruction of law enforcement and protects public officials of the judicial system and law enforcement agencies.

Liability of legal persons (art. 26)

Salvadoran law does not contain the principle of criminal liability of legal persons.

The Criminal Code regulates the special subsidiary civil liability for legal persons in its articles 38, 116 and 118-121 while the Commercial Code provides for administrative liability and the possibility of dissolution of a legal person which has an illicit objective or cause, in its articles 343, 344, 350-353 y 355.

Participation and attempt (art. 27)

The Criminal Code regulates participation (articles 32 to 37) and attempt (article 62). The preparation with the intention of committing a crime of corruption is not criminalized.

Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)

All offenses under the Convention are punishable by deprivation of liberty of between 2 and 15 years.

The Constitution (articles 236-238) and the Code of Criminal Procedure (articles 419-420) foresee jurisdictional privileges for senior officials, parliamentarians and judges; there is a perception that the requirements to lift privileges may pose obstacles.

The principle of opportunity is provided in limited cases that take into account the impact on the protected legal interest.

The increase of the extension of provisional detention periods despite the existence of alternatives is noted with concern.

While there are regulations concerning parole and advance parole, there is limited capacity to implement them.

A public official accused of corruption may be suspended if he or she has been sanctioned by the Government Ethics Tribunal, or enjoys jurisdictional privileges.

The Criminal Code contains the sanctions of absolute disqualification and special disqualification; such penalties are not provided for all crimes of corruption.

In addition to the criminal regime, there is the administrative sanctioning regime (under the responsibility of the Court of Accounts), an Ethics regime (under the responsibility of the Government Ethics Tribunal) and a disciplinary regime (under the responsibility of the Civil Service Commissions).

With regard to cooperation with law enforcement authorities, article 18 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code provides for the possibility of dispensing with criminal prosecution for the collaborator who provides relevant information; cooperation to deprive criminals of the proceeds of crime is not explicitly mentioned. Article 4 of the Law against money and asset laundering contains a specific regulation. The mitigation of punishment in cases of collaboration and cooperation with the competent authorities of another State party are not regulated.

Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)

El Salvador has a Special Law for Protection of Victims and Witnesses and the Witness and Victims Protection Programme; it also has evidentiary rules which permit the provision of testimony without jeopardizing the safety of witnesses. Victim participation in appropriate stages of the criminal proceedings is regulated by article 106 of the Criminal Code.

Whistleblower protection does not provide labor protection in a general manner.

Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)

The Criminal Code regulates the confiscation of the product of crime and the instruments used in the commission of a crime in articles 126 (Loss) and 127 (Confiscation) of the Criminal Code; these norms do not apply to the instruments destined for use in the commission of the offence.

El Salvador has a draft law on non conviction-based forfeiture.

Article 283 of the Criminal Code regulates the confiscation of objects and documents “related to the commission of a criminal act”, which does not seem to cover the product of the criminal act. Only in the case of asset laundering all elements of confiscation foreseen in the Convention are covered. There are no general rules that cover the administration of seized and confiscated assets applicable to corruption offences.

There is no legislation on the confiscation of proceeds of crime that have been transformed or converted into other property or intermingled with property acquired from legitimate sources; therefore also not on the income or other benefits derived from such assets, into which such proceeds of crime have been transformed or converted.

Article 21 of the Law against money and asset laundering regulates the provisions of paragraph 8 of article 31 for the offense of money laundering.

Article 127 of the Criminal Code provides that the confiscation is without prejudice to the rights of bona fide third parties, which is not regulated in cases of loss.

Bank secrecy can be lifted by court order or by order of the Attorney General (article 277 of the Code of Criminal Procedure, article 232 of the Banking Law).

Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)

The current statute of limitation seems short and the possibilities for interruption seem limited (article 242 of the Constitution, articles 32, 33, 36 and 86 of the Code of Criminal Procedure).

El Salvador does not have legislation on any consideration of any previous conviction in another State in criminal proceedings.

Jurisdiction (art. 42)

El Salvador has established its jurisdiction over most of the situations referred to in Article 42 of the Convention, but has

not clearly established jurisdiction over corruption offences committed by one of its nationals; the acts of participation, preparation, attempt and others with a view to committing money laundering committed completely outside the territory of the country; and the crime committed against the State party. In addition, El Salvador has not established its jurisdiction when the alleged criminal is present in its territory and it does not extradite such person.

El Salvador has not submitted legislation or practical cases of relevant consultations under Article 42, paragraph 5 of the Convention.

Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)

El Salvador does not have legislation on the consequences of acts of corruption, but does have rules on compensation for damages (article 245 of the Constitution, 115-121 of the Criminal Code and 42-43 of the Code of Criminal Procedure).

Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)

There are specialized anticorruption organs; it is noted that the police does not have a specialized unit for the investigation of financial assets.

Measures of cooperation between national agencies exist; however, it is noted with great concern that there are legal and practical obstacles that impede the flow of information between institutions and a lack of ease of communication between investigative and prosecutorial authorities and public agencies.

No structured cooperation between investigative authorities and the private sector is observed. Some mechanisms for the reporting of crimes of corruption exist.

2.2 Successes and good practices

- With respect to the statute of limitation, it is noted as a good practice that the statute of limitation for offences and crimes occurring while in the public function only start to count from the time the official leaves his or her post.
- The efforts made by El Salvador to enable the implementation of pilot programs of social reintegration are noted.

2.3 Challenges in implementation

General observations

- The creation of a mechanism of publication of statistics on investigated and adjudicated cases is recommended.
- It is recommended that efforts be made to achieve the full integration of the Government Ethics Tribunal in order to meet the quorum, and to provide it with the necessary resources and specialized personnel in investigations.
- The parallel sanctioning system in administrative, disciplinary and ethics regimes is noted with concern, and it is recommended that avenues be sought to avoid impunity or duplication of sanctions.
- The need to continue implementing an active policy of prison reform is emphasized, and of assigning, insofar as possible, the necessary budgetary resources for this.
- It is recommended to amend the definition of a public official or employee to include persons performing services for a legislative or judicial entity.

Criminalization

With respect to criminalization, it is recommended that El Salvador

- modify the offences of active and passive bribery and active transnational bribery to cover the advantages to third parties (article 15 paragraphs a) and b), article 16 paragraph 1); and consider the possibility of criminalizing passive transnational bribery (article 16 paragraph 2).
- consider the possibility of creating the offence of active trading in influence (article 18 paragraph a).
- ensure that article 336 of the Criminal Code is applied to cases of indirect solicitation or acceptance; if the court does not interpret the law in this manner in the future, the law may need to be clarified through legislative reform (article 18 paragraph b)).
- in relation to illicit enrichment, that the Probity Section of the Supreme Court be permitted to lift bank secrecy where irregularities in the asset declarations of public officials are detected; in addition, the Supreme Court is encouraged to devote more specialized personnel to the verification of asset declarations, and it is suggested that a better coordination between the Probity Section and the Attorney General's Office be considered, particularly that the latter gives feedback to the former with regard to follow-up on potential cases of illicit enrichment (article 20).
- consider the possibility of criminalizing bribery in the private sector (article 21).
- Consider the possibility of including in the Criminal Code a general offence of misappropriation or embezzlement in the private sector (article 22).
- with respect to the offense of money laundering, ensure that the exemption from criminal responsibility (article 4 paragraph 4 of the Law against money laundering) be subject to the assessment of each individual case and not be applied automatically; if the court does not interpret the law in this manner in the future, the law may need to be clarified through legislative reform (article 23 paragraph 1).
- criminalize, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, the association and conspiracy to commit money laundering (article 23, numeral (ii) of subparagraph (b) of paragraph 1).
- consider the possibility of amending articles 7 and 8 of the Law against money and asset laundering to cover the element of "continued retention" (article 24).
- include in articles 153 to 155 and 307 of the Criminal Code the interference in the production of evidence (article 25 a), and that specific offences be created to avoid the obstruction of law enforcement and specifically to protect public officials of the judicial system and law enforcement agencies (article 25 b).
- consider the possibility of including in the legislation the criminal liability of legal persons; of adopting a less restrictive definition of civil responsibility of legal persons (article 119 of the Criminal Code) and allowing joint liability between legal and natural persons for all crimes foreseen in the Convention; and including the power to dissolve licit legal persons for crimes committed by their representatives in the Commercial Code (article 26, paragraphs 1 and 2).
- El Salvador could adopt the necessary measures to criminalize the preparation for a crime of corruption (article 27 paragraph 3).

Law enforcement

With regard to law enforcement, it is recommended that El Salvador should:

- consider extending the statute of limitation for corruption offences and/or expanding the reasons for interrupting the statute of limitation (article 29).
- consider reviewing the process of lifting jurisdictional privileges and immunities (article 30 paragraph 2)
- dedicate the necessary resources for an efficient administration of justice and increase the awareness-raising efforts among judges with regard to the alternatives to detention (article 30 paragraph 4).

- with regard to parole and early parole, and as far as possible, increase the number of enforcement judges in the country and to ensure the criminological capacity to carry out the necessary expertises (article 30 paragraph 5)
- consider establishing proceedings to suspend public officials accused of corruption offenses, also in cases in which they have not yet been sanctioned (article 30 paragraph 6)
- include the disqualification, including disqualification from holding office in an enterprise owned in whole or in part by the State, as a sanction for all offences established in accordance with the Convention (article 30 paragraph 6).
- adopt legislation on the confiscation of the instruments destined for use in the commission of an offence (article 31 paragraph 1 b)), and amend the legislation on seizure and freezing to assure that all products and instruments of corruption offences are covered (article 31 paragraph 2).
- adopt a regulation on the administration of seized, frozen or confiscated assets that applies to all corruption offences and covers all the elements foreseen article 31 paragraph 3.
- adopt legislation on confiscation of proceeds of crime that covers the case in which such proceeds of crime have been transformed or converted into other property (article 31 paragraph 4), such proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources (article 31 paragraph 5), and of the income and other benefits derived from property in which such proceeds have been transformed or converted (article 31 paragraph 6).
- consider requiring that an offender in corruption cases demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of its domestic law (article 31 paragraph 8).
- Establish a procedure for bona fide third parties that applies to the institute of loss (article 31 paragraph 9).
- Continue looking for opportunities to conclude agreements or arrangements with other States for the international reubication of witnesses and experts, taking into account that such agreements and arrangements have already been concluded (article 32 paragraph 3).
- Expand the labour protection provided to whistleblowers on corruption offences to all public officials and employees in the private sector (article 33).
- Adopt, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, measures to address consequences of corruption in legal proceedings to annul or rescind a contract, withdraw a concession or other similar instrument or take any other remedial action (article 34).
- Amend the regulation on cooperation with justice, to refer explicitly to the cooperation through specific help that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds (article 37 paragraph 1).
- consider the possibility to foresee the mitigation of punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of corruption offences (article 37 paragraph 2).
- consider the possibility to conclude agreements or arrangements with regard to the cooperation with justice in another State (article 37 paragraph 5).
- establish channels for cooperation and exchange of information, in particular in cases that involve the Prosecutor's Office, and consider the possibilities to facilitate a more efficient coordination process (article 38).
- adopt the necessary measures to encourage the cooperation between national investigating and prosecuting authorities and the Prosecutor's Office, and entities of the private sector, in particular financial institutions, relating to matters involving the commission of corruption offences (article 39 paragraph 1), and consider the possibility to encourage its citizens to report the commission of corruption offences (article 39 paragraph 2).

- El Salvador could adopt the necessary measures in its internal legislation, to take into consideration any previous conviction of an alleged offender in another State for the purpose of using such information in criminal proceedings relating to a corruption offence (article 41).
- El Salvador could consider to establish its jurisdiction over:
 - all corruption offences committed by one of its nationals or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory (article 42 paragraph 2 b));
 - the acts of participation, preparation, attempt etc. of money-laundering committed completely abroad (article 42 paragraph 2 c));
 - the cases when the offence is committed against the Republic of El Salvador (article 42 paragraph 2 d));
 - the cases when the alleged offender is present in El Salvador's territory and it does not extradite him or her (article 42 paragraph 4).

El Salvador is encouraged, if it learns that any other States Parties are conducting an investigation or judicial proceeding in respect of the same conduct, to consult with the other State with a view to coordinating the actions (article 42 paragraph 5).

2.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention

El Salvador has requested technical assistance to implement the mentioned observations:

- Legislative assistance (arts. 15-25, 29-31, 33-34 and 37, among others),
- Strengthening of specialized capacity (arts. 30 and 31, among others),
- Assistance to improve interinstitutional coordination (arts. 38 and 39),
- Support in the area of reintegration of offenders (art. 30, para. 10).

3. Chapter IV: International cooperation

3.1. Observations on the implementation of the articles under review

Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47)

The requirements for extradition in El Salvador are contained in article 28 of the Constitution and the treaties that El Salvador has ratified. However, with the exception of passive extradition of nationals, a treaty base is not required. The principle of reciprocity has been used, although in exceptional cases. The Convention cannot be used as a legal basis.

Dual criminality is a requirement for extradition.

Due to the limited number of extradition cases, case law is still evolving

The extradition of nationals is generally not allowed, unless a treaty specifically allows for it and foresees reciprocity.

With regard to extraditable offences, some of El Salvador's bilateral extradition treaties adopt the list approach and do not include all corruption offences. However, El Salvador would consider the offences contained in the Convention as extraditable offences and presented a relevant case.

Requests are processed through diplomatic channels. The power to determine whether passive extradition is permissible is vested in the Supreme Court of Justice.

When extradition is denied on the ground of nationality, Salvadorian legislation does not contain any specific rule that obliged El Salvador to submit the case to its national competent authorities.

There is no national legislation on the enforcement of a sentence in accordance with the legislation of another State party, but it is not prohibited.

With regard to the transfer of sentenced persons, El Salvador has ratified various bilateral and multilateral agreements.

El Salvador has no legislation or treaties on the transfer of criminal proceedings.

Mutual legal assistance (art. 46)

The basis for the procedure of rendering and receiving mutual legal assistance in El Salvador emanates from article 182 (3) of the Constitution. El Salvador has concluded numerous bilateral, regional and international treaties and conventions on mutual legal assistance and can provide assistance on the basis of reciprocity.

Article 46 paragraphs 7 and 9-29 can be applied directly (article 144 of the Constitution), and have been applied recently in a case. The limits of the direct application of these provisions in the absence of a treaty is not clearly regulated, and it is not regulated whether there can be derogation of existing MLA treaties in favour of the mentioned paragraphs.

The central authority for mutual legal assistance is the Ministry of Foreign Relations. Requests do not need to be processed through diplomatic channels, and in the most urgent cases, requests can be processed through Interpol. With regard to other MLA treaties, other institutions have been designated as central authorities. From January to June 2012, the central authority processed 83 MLA requests, both passive and active.

The processing of MLA requests is carried out by a dedicated MLA unit within the Supreme Court of Justice, which presents the request to the full court of the Supreme Court which has to decide with a quorum of 8 (out of 15) judges who must be unanimous in their decision.

Dual criminality is generally not required except where treaties provide so, for example when the request refers to coercive measures.

El Salvador is currently working on bilateral agreements with five countries.

Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)

In El Salvador, the police cooperates with the police forces of other States, directly or through INTERPOL; further, cooperation is done through cooperation agreements among Prosecutor's Offices, the Hemispheric Information Exchange Network for Mutual Assistance in Criminal Matters and Extradition of the Organization of American States, the Ibero-American Network for International Legal Cooperation (IberRed), the network of prosecutors REFCO, the Egmont Group and the World Customs Organization.

Article 78 of the Criminal Procedure Code regulates international investigations; the extent of the cooperation is limited to investigations and does not include judicial proceedings.

El Salvador has the basic legal framework to apply special investigative techniques to "severe criminal acts"; no bilateral or multilateral agreements or arrangements have been signed for the use of these techniques.

3.2 Successes and good practices

- El Salvador has expressed that it plans to adopt a law on international cooperation (articles 44, 46).

- El Salvador is party to regional agreements serving as a basis for extradition (article 44 paragraph 6).
- As a member of the Organisation of American States, El Salvador has access to the Secure Electronic Communication System (article 46)
- The MLA unit of the Supreme Court of Justice managed to solve a problem with a case backlog by using a system that prioritized old cases (article 46).
- In the MLA treaty with Argentina, a specific provision expressly states that banking secrecy shall not be a ground for refusing assistance. (article 46 paragraph 8)
- Article 46 was invoked in two recent cases (article 46 paragraphs 9-29).
- Salvadorian authorities have used different channels, including communication through phone, as a means of consulting about progress in mutual legal assistance requests (article 46 paragraphs 9-29)

3.3 Challenges in implementation

- It is recommended that El Salvador adopt legislation clarifying the procedures and the legal basis for extradition; this legislation could foresee mechanisms to expedite procedures and simplify evidentiary proceedings, and contain the obligation to adjudicate in cases in which the extradition is denied on the basis of nationality (article 44)
- It is recommended that El Salvador ensure that the principles embodied in article 44 are applied, for example, that all corruption offences are considered as extraditable offences (article 44).
- El Salvador may grant the extradition in the absence of dual criminality (article 44 paragraph 2).
- El Salvador could apply directly the principle of extradition for related offences (article 44 paragraph 3).
- For new treaties in future it is recommended that all corruption offences are included and that they are not considered as political offences (article 44 paragraph 4).
- El Salvador may wish to conclude further extradition treaties with other States Parties, given that it does not consider the UNCAC as a legal basis for extradition (article 44 paragraph 6)
- El Salvador is encouraged to consider the direct application of article 44 paragraph 13 to allow for the enforcement of a sentence in cases the extradition that is sought for the enforcement of a sentence is refused on the grounds of nationality (article 44 paragraph 13).
- With regard to the transfer of sentenced persons, some issues were mentioned when transferring a prisoner to another country where that country does not have similar sentences. It would also be useful if there were some domestic guidelines on deadlines when relevant decisions should be made. Challenges were observed with regard to the costs of the transfer, and with the fact that the transfer can break up family units; it would be good if there were measures to mitigate such effects (article 45).
- It is recommended that El Salvador should consider a proper centralized system of tracking and collating MLA statistics, and written standard operating procedures (SOPs) for the processing of MLA requests (article 46).
- It is recommended to consider a harmonization of the legal framework and of the different treaties with regard to dual criminality and tax offences, in order to fully implement paragraphs 2, 9 a) and 22 of article 46.
- El Salvador is encouraged to transmit information without prior request where it believes that such information could assist the authority of another State, taking into account that its legal system does not prohibit that, and to adopt specific legislation and to apply paragraph 5 directly when receiving information (article 46 paragraph 4 and 5).

- El Salvador is encouraged to consider applying article 46, paragraphs 9-29 directly, both in the absence of a treaty and by agreement on their application in lieu of an existing treaty (article 46 paragraphs 9-29).
- El Salvador may wish to consider and study (with the help of statistics when these become available) whether there is a need for having a common central authority for all MLA treaties (article 46 paragraph 13).
- It is recommended that El Salvador adopts legislation or sign agreements with other States that could allow the transfer of criminal proceedings to another State (and vice-versa) (article 47).
- El Salvador is encouraged to consider entering into bilateral or multilateral arrangements on direct cooperation of its law enforcement agencies and their counterparts (article 48 paragraph 2).
- It is recommended that El Salvador sign bilateral or multilateral agreements or arrangements for the use of special investigative techniques in the context of international cooperation (article 50).

3.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention

El Salvador has requested technical assistance to implement the mentioned observations:

- Assistance in the development of legislation on international cooperation (articles 44, 46),
- Development of new treaties and agreements (articles 44, 47, 48, 50),
- Strengthening of specialized capacity (articles 44, 46, 50).